

ese reglamento, y considerando: que el derecho exigido á los quejosos no esta comprendido en la partida relativa del presupuesto de la federacion, fijado por la ley de 1º de Junio del año pasado; y que por el artículo 14 capítulo cuarto del nuevo arancel ya citado, quedan suprimidos todos los derechos de puerto, con escepcion del de practicaje cuando fuere pedido al práctico. Con fundamento de los artículos 14 y 101 de la Constitucion federal, se decreta: que por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Campeche en 5 de Junio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Domingo Diego, Joaquín Lanz, Joaquín Gutierrez y Compañia, Juan de la Cabada, Manuel Sintas y Juan Ferreyro, contra el cobro que como derechos de oficina les hacen los CC. Capitanes de los puertos de Campeche y del Carmen, al arribo de las embarcaciones referidas.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Noviembre 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. José María Urquiza como defensor del reo Julian Cedillo, contra el Presidente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, por haberlo juzgado y sentenciado á la última pena.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal interino, en el juicio de amparo promovido por el defensor del reo Julian Cedillo condenado á la última pena por el doble homicidio cometido en las personas de Simon y Eleuteria Valdez, su estado supuesto que es el de alegar de buena prueba, dice: que durante el término probatorio de este juicio, el C. Gefe de Hacienda, que fungia como Promotor fiscal, no produjo prueba alguna, tal vez por no creerlo necesario; pues de la causa que se instruyó al reo, y cuyo testimonio obra de fojas 13 á 41 de este expediente, se desprenden datos que no dejan duda alguna de que Cedillo cometió el horrible crimen de que se le acusa, y de que éste está comprendido en la ley de 23 de Mayo de 1872. Para cerciorarse de esto, no se necesita recurrir á las diversas constancias de la causa y basta solo fijarse en la mas robusta de ellas, en la confesion de Cedillo, quien en su inquisitiva confiesa claramente haber dado muerte con una carabina de dos tiros á Simon y Eleuteria Valdez, el lunes 21 de Abril del presente año, en el punto llamado "el paso de Tata grande" (fojas 23 vuelta). No puede haber prueba mas convincente de la comision de este delito y de su autor, que esta confesion espontánea del delincuente agregada á las demas constancias de la causa, en las cuales está probado perfectamente el cuerpo del delito. Dice Cedillo en su declaracion, que Simon Val-

dez lo habia desafiado diciéndole *que el lunes le fuera á salir*; pero esto no puede ser mas que una evasiva, pues nadie presenci6 el desafio, y si esto hubiera sido cierto, hubiera dado muerte á Simon que fué el desafiante, y no á su indefensa hermana: y no es creible ademas, que Simon siendo el desafiante, ocurriera desarmado como consta que estaba, pues solo portaba un cuchillo ó puñal, tal vez para las labores del campo ó otros usos, siendo costumbre entre ciertas gentes cargar dicha arma con la que por cierto no podia defenderse de una carabina, como se comprende desde luego, por la superioridad y *ventaja* de esta arma sobre la otra. Queda tambien plenamente probado, que el delito cometido por Cedillo, está comprendido en la ley de 23 de Mayo de 1872, la que en la parte tercera del artículo primero para los efectos de ella reputa salteadores, á todos los que en caminos ó en lugares despoblados, asalten á los individuos con violencia, llevando el objeto de robarlos, herirlos ó matarlos, como ha dicho el Sr. Gefe de Hacienda que fué el que dictaminó en este negocio. Mucho se resiste Sr. Juez, empeñarse en aplicar el severo brazo de la Justicia, contra un desgraciado á quien tal vez los celos ó un acto primo condujeron á la senda del crimen; mas el peso del deber y la obligacion de procurar el cumplimiento de las leyes federales, me impelen á demostrar que el delito de que se trata, se comprende en la citada ley de 23 de Mayo de 1872, porque mi conciencia así me lo dicta; mas puedo equivocarme, pues como hombre estoy sugeto á errar, y por lo mismo el Juzgado puede tener presente la menor edad del reo, su idiotéz ó ignorancia, el lugar donde se cometió el delito, y otras cosas alegadas por el defensor del reo, para fallar sobre si debe ó no juzgarse por la ley de salteadores y plagarios.

Saltillo, Junio 10 de 1873.—*Lic. Jacinto de J. Lozano.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Saltillo, Junio 18 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido el 17 de Mayo próximo pasado por el C. José M. Urquiza, defensor del reo Julian Cedillo, contra el acto del C. Presidente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, en cuya virtud fué juzgado y sentenciado su defenso á la última pena, de conformidad con la ley de 18 de Mayo de 1871 sobre saltadores y plagarios. Vista la suspension de la ejecucion de la pena de muerte, que segun el informe de la referida autoridad, debía verificarse el 19 á las diez de la mañana, la que no obstante las razones que en comunicacion fecha 19 manifestó el C. Presidente de Ramos Arizpe, para no cumplimentar desde luego el decreto de suspension dictado por el Juzgado, fué obsequiada en virtud de las consideraciones legales que se hicieron presentes á la referida autoridad en la contestacion que se dió á su nota expresada; el informe con justificacion dado por el mencionado Presidente del Ayuntamiento, que consiste en la remision del proceso instruido al reo Cedillo; el pedimento emitido por el C. Gefe superior de Hacienda en sustitucion del C. Promotor fiscal del Juzgado que se hallaba ausente; las pruebas presentadas por el defensor de Cedillo, que consisten en una informacion de testigos que deponen sobre la menor edad é idiotismo de este; el alegato de buena prueba presentado por el Promotor interino y todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: que del proceso remitido en testimonio por la autoridad ejecutora, aparece plenamente probado, por la confesion del reo, el delito de asalto con violencia cometido en despoblado en las personas de Mariana Castañeda, Simon y Eleuteria Valdéz: que así mismo aparece probado, que Cedillo en ese acto, causó la muerte de Simon y Eleuteria y golpeó á Mariana madre de estos; que el artículo octavo de la ley de 18 de Mayo de 1871 sobre saltadores

dorcs y plagiarios, reputa como tales para los efectos en ella expresados, á todos los que en caminos ó lugares despoblados asalten á los individuos con violencia, llevando el objeto de robarlos, herirlos ó matarlos; que por el artículo primero de la mencionada, están suspensas para los salteadores y plagiarios las garantías de que habla la primera parte del artículo 13 y 19, y los artículos 20 y 21 de la Constitución general de la República: que estando como queda dicho, suspensas para los salteadores las garantías referidas, no puede decirse que con la ejecución de la pena de muerte á que ha sido sentenciado Cedillo por autoridad competente, se violen ninguna de las garantías que se invocan por el defensor de este, al promover el recurso de amparo, pues que no se trata de otra cosa que del exacto cumplimiento de una ejecutoria legal, la que desde luego que por la Diputación permanente del Estado se negó la gracia de indulto solicitada por Cedillo ó su defensor, ha quedado ya sin recurso: que no está probada la circunstancia de la menor edad, de una manera legal, pues los testigos examinados sobre esta circunstancia, no afirman de una manera segura que sea de menor edad el reo ni dan la razón de su dicho, sino que según su conocimiento no llega aun á la mayor edad.

Con fundamento en los anteriores considerandos es de resolverse y se resuelve: Primero: Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al reo Julian Cedillo contra el acto del Presidente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, en cuya virtud fué juzgado y sentenciado á la última pena, conforme con la ley de salteadores y plagiarios, y de cuya pena no obtuvo el indulto que pidió; declarándose también, que por la insolvencia tanto del reo como de su defensor, no se les impone la multa de que habla la ley de 20 de Enero de 1869 sobre juicios de amparo. Segundo: Notifíquese, remítase copia de esta sentencia á la redacción del periódico oficial del Estado

para su publicación, y hágase otro tanto con estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito del Estado de Coahuila definitivamente juzgando, lo decretó, mandó y firmó actuando como testigos de asistencia. Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez.*—A.—*Bernardo Laredo.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 22 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. José Maria Urquizum como defensor del reo Julian Cedillo, contra el presidente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, por haberlo juzgado y sentenciado á muerte, aplicándole la ley de 18 de Mayo de 1871 contra salteadores y plagiarios, como culpable de haber asaltado y dado muerte en lugar despoblado á Simon y Eleuteria Valdés, é inferido varios golpes á la madre de esta, Mariana Castañeda, cuyo delito no está comprendido en concepto del defensor de Cedillo, entre los que tuvo por objeto reprimir la expresada ley; al aplicarse esta á su defensor, cree que se han violado las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 21 de la Constitución federal, y considerando: que la ley de 23 de Mayo de 1872 que prorogó por un año mas la de 18 de Mayo del año anterior, declara expresamente que se entiende por salteadores, al que ó á los que en los caminos ó lugares despoblados, asalten al individuo con violencia, con objeto de robarlo, herirlo ó matarlo; disposicion en todo aplicable al delito de asalto y homicidio de que está convicto y confeso el reo, por lo que al ser juzgado conforme á estas leyes, no ha habido violación del artículo 14 constitucional en la parte que dispone: que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al hecho

imputado. Que estando suspensas para los salteadores por las mencionadas leyes de Mayo de 1871 y 1872, las garantías de que habla la parte primera del artículo 13 y el artículo 21 de la Constitución, el hecho de haber sido juzgado Julian Cedillo por una autoridad política, no puede dar lugar al amparo federal. Que aunque en el curso de este juicio se intentó probar que Cedillo era menor de edad, no quedó plenamente justificada esta circunstancia, pues los testigos presentados con tal objeto, solo afirmaron que según su entender, era menor de edad, pero sin manifestar ningún dato positivo que corroborara su asercion. Con fundamento del artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en 18 de Junio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Julian Cedillo, contra el acto del presidente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, en cuya virtud fué juzgado y sentenciado á la última pena conforme á la ley de salteadores y plagiarios.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CO. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa, fiscal mayor.*

Es copia que certifico. México, 6 de Noviembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa* oficial mayor.

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Durango, contra Isidro Santillan, por falsificacion de moneda.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Gefe de Hacienda, encargado de llevar la voz fiscal, dice: que los recados que obian en autos no aparece ninguna prueba de que Isidro Santillan haya falsificado moneda; pero sí está probado plenamente que portaba monedas falsas, por cuyos fundamentos pide se imponga al reo en calidad de circulador de moneda falsa, el castigo que demarcan las leyes de la materia.

Durango, Junio 19 de 1873.—*Juan Nájera.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Durango, Junio 27 de 1873.—Vista esta sumaria instruida contra Isidro Santillan, de 24 años de edad, casado, barillero, originario de Zacatecas, por habérsele encontrado 140 piezas amarillas de moneda falsa; Considerando: que el cuerpo del delito está suficientemente justificado, y que el acusado Santillan, ha sido el circulador de la moneda de que se hace mension en esta sumaria; que la cantidad de moneda, su clase y el barnis amarillo con que aparece, hace sospechar muy fundadamente que Santillan las retuviera en su poder con el fin de circularlas, y con conocimiento de su falsedad; que esas sospechas suben de punto, si se atiende á las circunstancias que intervinieron en la aprehension del acusado, como son el haber hecho á huir, y el haber tirado alguna de las monedas según se collige de las declaraciones de Modesto Lugo y Mariano Espinosa, fojas 7 y 8 vuelta de esta sumaria, Que lo anteriormente expuse